

## Casos prácticos y su documentación

### *Casos prácticos*

#### **1 Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad**

---

**ANDRÉS RAMÓN TRILLO GARCÍA**

*Letrado de la Administración de la Seguridad Social*

**CRISTINA ARAGÓN GÓMEZ**

*Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*

**ISSN 0214-6045**

**Revista de Información Laboral 2**

##### **Sumario:**

I. Enunciado del caso

II. Cuestiones

III. Propuesta de solución

#### **I. ENUNCIADO DEL CASO**

Doña Paula trabajaba como auxiliar de caja para CAMBIOS DE MONEDA S.A.; entidad encargada de prestar el servicio de cambio de dinero en los salones de juego de la empresa CASINO , con el objeto de cubrir la necesidad de aquellos clientes que solicitaran cambio para jugar con las máquinas tragaperras o en otros juegos de azar. En particular, Doña Paula realizaba esta actividad en el salón de juego sito en la calle Arrabides nº 4 de Madrid. Los servicios los prestaba sola, durante una jornada de ocho horas diarias, en un habitáculo separado del resto de las instalaciones del casino y siendo la actividad grabada por cámaras de video.

Sobre las 16:15 horas del día 12 de octubre de 2007, Doña Paula fue atracada en el centro de trabajo por cuatro individuos que portaban grandes cuchillos. A consecuencia de dicho incidente, la trabajadora sufre un trastorno por estrés postraumático con limitación funcional importante lo que ha provocado el reconocimiento de una pensión por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, cuya cuantía se ha visto incrementada en un 20% al haber cumplido la trabajadora 55 años de edad y carecer de otro empleo.

Ni por parte de la empresa contratista ni por parte del CASINO se informó a la trabajadora de los riesgos que se afrontaban en caso de atraco, limitándose la empresa a advertir que, en el supuesto de atraco, se limitarse

a no ofrecer resistencia, sin que se la hubiera formado e informado del protocolo de actuación de medidas de seguridad que ambas empresas habían adoptado ante situaciones de emergencia. De este modo, se incumplió lo previsto en el artículo 120 del RD 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE 10-1-1995), de conformidad con el cual los establecimientos de entidades de crédito donde se custodien fondos o valores deberán tener instalados pulsadores de alarma, dispositivos electrónicos para detectar el ataque o la entrada de armas, existencia de recinto estanco para el cajero que le proteja de los ataques, etc.

Tras el accidente, la empresa MONEDAS S.A. ha vendido el negocio que se realizaba en el centro de trabajo del casino en el que se produjo el accidente, a la empresa EUROPA CAMBIOS S.A.

Iniciado el procedimiento de imposición de recargo, tras la comunicación efectuada al INSS por parte de la Inspección de trabajo, se ha dictado resolución administrativa imponiendo a la empresa MONEDAS S.A. un recargo de prestaciones que asciende al 30% de la pensión; aun cuando ya habían transcurrido más de cinco años y medio desde que se acordó iniciar el expediente administrativo hasta que se dictó resolución administrativa, sin que se hubiera dado a la empresa trámite de alegaciones.

## II. CUESTIONES

**Primera.-** La empresa «CAMBIOS DE MONEDA SA» considera que no procede la imposición de recargo de prestaciones toda vez que el atraco era inevitable y que no se constata la existencia de relación de causalidad entre las infracciones de las normas de seguridad y el resultado lesivo. ¿Qué viabilidad tiene esta argumentación?

**Segunda.-** En los procedimientos de imposición de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, ¿se puede imputar la responsabilidad a la empresa principal en los casos de contrata y subcontrata de obras y servicios? ¿Cabría también la responsabilidad solidaria de la empresa EUROPA CAMBIOS S.A. en cuanto sucesora de CAMBIOS DE MONEDA S.A.?

**Tercera.-** ¿Se puede extender la responsabilidad a una tercera empresa que no fue parte en el primer procedimiento administrativo, en el que se impuso el recargo a la empleadora?

**Cuarta.-** ¿Cabe imponer el recargo sobre el complemento del 20% de la incapacidad permanente total, a pesar de que dicho incremento se condiciona a circunstancias personales y laborales del trabajador beneficiario del recargo?

**Quinta.-** ¿Procede acordar la nulidad de la resolución administrativa de imposición del recargo a consecuencia de la omisión del trámite de audiencia?

**Sexta.-** ¿Habría prescrito la facultad administrativa para imponer el recargo, al haber transcurrido más de cinco años?

**Séptima.-** La trabajadora ha presentado una demanda contra la empresa exigiendo una indemnización por daños y perjuicios, a consecuencia de las secuelas derivadas del accidente de trabajo. ¿Habría que deducir del montante de la indemnización el importe del recargo reconocido?

## III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

**Primera cuestión.-** En relación con la existencia de nexo causal entre la infracción de medidas de seguridad y el daño ocasionado con motivo del accidente de trabajo, la doctrina del Tribunal Supremo se inclina por presumir su concurrencia cuando el incumplimiento empresarial ha podido elevar las posibilidades de que el acaecimiento del suceso lesivo se produzca. Como se razona en la [STS 30-6-2010](#) (RJ 2010, 6775), la propia existencia de un daño puede evidenciar el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado (porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, porque no protegió a los trabajadores frente al riesgo detectable y no evitable, etc.). La deuda de seguridad que corresponde al empresario determina que, actualizado el accidente de trabajo, para enervar su posible responsabilidad del

empleador ha de quedar acreditado que ha agotado toda la diligencia exigible, más allá incluso de las exigencias reglamentarias. En cuanto a la carga de la prueba, el Tribunal Supremo considera aplicable de forma analógica el artículo 1183 CC, de conformidad con el cual el incumplimiento de una obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario. De la misma manera, resulta igualmente de aplicación el artículo 217 LECv, tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos (secuelas derivadas del accidente de trabajo), como a la prueba de los hechos impositivos, extintivos u obstativos (diligencia exigible), así como a la disponibilidad y facilidad probatoria, pues es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta. En resumidas cuentas, el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiera producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario. Ahora bien, en todos estos casos, es al empresario a quien corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es titular de la deuda de seguridad, habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

Fruto de esta construcción jurisprudencial, el artículo 95.2 LRJS establece que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. A tal efecto, no podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador, ni lo que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.

Más concreta a este respecto es la doctrina establecida en las [sentencias TS 25-6-2008](#) (RJ 2008, 4450) y [12-6-2013](#) (RJ 2013, 5730), que advierten que si bien es cierto que cualquier persona puede sufrir un robo en las más diversas circunstancias –caminando por la calle, encontrándose en su domicilio, estando parada en un semáforo, etc–, no es menos cierto que el lugar donde prestaba servicios –la oficina de la caja de ahorros– sufre de forma frecuente, con mucha mayor probabilidad que en otros lugares, y, en ocasiones con una violencia extrema, atracos durante las horas en que permanece abierta al público, concurriendo circunstancias que agravan el riesgo, como es la presencia de numerosos clientes cuyo comportamiento puede influir en el atracador, la necesaria colaboración que se exige por parte de los atracadores a los empleadores que han de facilitar el dinero (abrir la caja fuerte, abrir las cajas de seguridad, etc.) y cuyo comportamiento asimismo puede influir notoriamente en que el desenlace del atraco se produzca sin daños a las personas.

Estos datos evidencian, por lo tanto, que el atraco a una entidad bancaria tiene el carácter de «riesgo laboral», ya que supone la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, constituyendo el daño las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con ocasión del trabajo. Por otra parte, el carácter inevitable del atraco no desvirtúa su consideración de riesgo laboral ya que los principios de la acción preventiva, regulados en el artículo 17 LPRL, señalan como primer principio general, el evitar los riesgos (apartado a) pero –consciente el legislador de que, en ocasiones, los riesgos no se pueden evitar– matiza en el apartado b) que el empresario deberá evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

**Segunda cuestión.-** En los supuestos de externalización productiva, la empresa principal puede ser considerada sujeto infractor a los efectos del artículo 123 LGSS, cuando la infracción sea imputable a la misma y el accidente se haya producido dentro de su esfera de responsabilidad.

En este sentido, la [STS 20-3-2012](#) (RJ 2012, 4189) señala que la obligación específica de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones del contratista por parte de la empresa principal se da en dos casos: a) cuando se trate de la misma actividad (artículo 24.3 LPRL); y b) cuando las labores se realicen en su centro de trabajo o en un centro sobre el que la principal extiende su esfera de control (artículo 24.1 y 2 LPRL).

Sin embargo, la doctrina jurisprudencial se muestra contraria a transferir la responsabilidad derivada del artículo 123 LGSS, por vía de la sucesión de empresa. En efecto, aunque el art. 44 ET dispone que en los supuestos de cambio de titularidad de una empresa el nuevo empresario queda «subrogado en los derechos y



obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior» (apartado 1º) y asimismo establece la responsabilidad solidaria «durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión» (apartado 3º), no hay que olvidar que tal afirmación se hace expresamente «sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social» (mismo apartado 3º), y es precisamente en este ámbito donde el art. 127.2 LGSS establece que en los casos de sucesión empresarial, el adquirente responderá solidariamente con el empresario anterior de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. Con lo que resulta: a) que las prescripciones de ambos preceptos son independientes, aunque complementarias; y b) que la responsabilidad prestacional se rige por el art. 127 LGSS y que –conforme a tal precepto– la solidaridad únicamente alcanza a las prestaciones causadas antes de la sucesión, pero no así a las prestaciones posteriores que traigan causa en incumplimientos empresariales previos.

A mayor abundamiento, aunque el recargo de prestaciones ostenta una innegable faceta prestacional que en cierto modo apuntaría a la posible extensión de su responsabilidad en los supuestos de sucesión de empresa, tal como proclama el art. 127.2 LGSS, su función punitiva hace que resulte determinante la idea del «empresario infractor» que utiliza el art. 123.2 LGSS. En consecuencia, la responsabilidad que comporta el recargo de prestaciones sólo es atribuible a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, por lo que resulta intransferible por la vía de la sucesión de empresa ([STS 28-10-2014](#) [RJ 2014, 5849]).

**Tercera cuestión.-** En tercer lugar nos preguntábamos si sería posible extender la responsabilidad a una tercera empresa que no había sido parte en el primer procedimiento administrativo. La respuesta a esta pregunta ha de ser positiva siempre que la acción no esté prescrita por haber transcurrido un plazo de cinco años. En los supuestos ordinarios de accidentes de trabajo para una concreta empresa, lo normal es que la acción inspectora se dirija contra el empresario formal que suele coincidir con el empresario «verdadero» o, en terminología de la jurisprudencia unificadora en interpretación del artículo 123 LGSS, con el «empresario infractor» ([SSTS 31-1-1994](#) (RJ 1994, 398), [16-12-1997](#) (RJ 2005, 9702), y [7-10-2008](#) (RJ 2008, 6969), entre otras muchas). Lo que ocurre es que cada vez son más frecuentes los supuestos de concurrencia de empresarios (contratas y subcontratas, empresas de servicios, empresas de trabajo temporal, grupos de empresas, control por distintos empresarios de centro de trabajo donde acontece el accidente, etc.), con respecto a los cuales la actuación inspectora puede iniciarse y desarrollarse de una forma más global, con el objeto de determinar los posibles empresarios infractores e incluso concluir sin que alguno de los considerandos inicialmente como tales resulte al final implicado en tales actuaciones administrativas.

Pues bien, a este respecto, la [STS 18-1-2010](#) (RJ 2010, 448), declara que la acción ejercitada por primera vez para exigir la responsabilidad solidaria de una tercera empresa derivada de la posible infracción de normas de prevención de riesgos laborales que pudieran dar lugar al recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad ex art. 123 LGSS, no cabe entenderla prescrita, caducada o extinguida por el agotamiento de una anterior vía previa administrativa, y posteriormente la judicial impugnatoria, exclusivamente frente a la directa empleadora a la que se impuso el recargo, sin haber sido parte en la referida tercera empresa ni en el expediente previo ni haberse intentado en el mismo ni en la vía judicial posterior, en su caso, extender la responsabilidad contra la citada empresa tercera; pudiendo iniciarse un nuevo expediente administrativo de no haber prescrito la correspondiente acción (art. 43 LGSS).

**Cuarta cuestión.-** En cuarto lugar, nos preguntábamos si cabía aplicar el recargo sobre el complemento del 20% de la incapacidad permanente. A este respecto, la jurisprudencia entiende que se impone el recargo sobre el incremento del 20% de la incapacidad permanente total, como sobre el incremento para retribuir la ayuda de una tercera persona en los casos de gran invalidez. Así, la STS 29-11-2010, RJ 2011/1353, establece que la naturaleza del citado incremento del 20 % es prestacional, por lo que es de plena aplicación el recargo establecido por falta de medidas de seguridad.

**Quinta cuestión.-** Habiéndose omitido el trámite de audiencia, ¿procedería acordar la nulidad de la resolución administrativa de imposición del recargo? En opinión del Tribunal Supremo, la no cumplimentación del trámite de audiencia al interesado en los procedimientos de imposición de recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad no provoca indefensión, ni supone un vicio de

procedimiento que determine la nulidad ni la anulabilidad del procedimiento administrativo. En tal sentido, el trámite de reclamación previa e, incluso, la propia vista del proceso permiten a la empresa alegar y presentar la documentación que estime oportuna en defensa de sus intereses. En tal sentido, se pronuncia la [STS de 28-5-2008](#) (RJ 2008, 4223) que señala lo siguiente: *«la parte alega la infracción de los apartados a) y e) del artículo 62.1 LRJ-PAC y ninguna de estas normas se ha infringido por la sentencia recurrida. No se ha infringido el apartado a), porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, aunque parece referirse a la tutela judicial efectiva en su modalidad de indefensión. Pero, el derecho que reconoce el artículo 24 de la Constitución se refiere, en principio, al proceso judicial, no al procedimiento administrativo, y en el presente caso la omisión del trámite de audiencia que hubiera permitido a la parte aportar “alegaciones” y aportar “documentos y justificaciones” (artículo 84 LRJ-PAC) no ha tenido relevancia alguna, pues la parte ha podido presentar tales alegaciones, justificaciones o documentos en el proceso judicial»*. La doctrina de la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha señalado también que, fuera del ámbito sancionador, la falta del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la misma indefensión, si se produce, podrán originar las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo constitucional ([STS CA 16-3-2005](#) [RJ 2005, 3264]). Tampoco la falta de audiencia equivale a la falta total y absoluta del procedimiento del apartado e) del artículo 62.1.LRJ-PAC, pues no podemos confundir la anulabilidad del acto por un vicio de forma (artículo 63.2 LRJ-PAC) con un supuesto de nulidad de pleno derecho del artículo 62, pues -como también tiene declarado la Sala 3ª del Supremo- la falta de un trámite como el de audiencia, por esencial que pueda reputarse, no supone por si misma que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; procedimiento que subsiste aún faltando la audiencia ([STS CA 13-10-2000](#) [RJ 2000, 7915]).

Estamos, por tanto, en el ámbito del artículo 63 LRJ-PAC, que es el de anulabilidad de los actos administrativos; anulabilidad que se produce por cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico distinta de las contempladas en el artículo 62. Pero como establece el número 2 de este artículo *«el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados»*. Pues bien, si la omisión de la audiencia no impide que el acto alcance su fin y no provoca indefensión no puede determinar la anulabilidad de las actuaciones. La indefensión ha de ser real y efectiva y no se deriva necesariamente de la falta del trámite de audiencia. Por tanto, para que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado de aducir, en apoyo de sus intereses, cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello ([STS 11-7-2003](#) [RJ 2003, 5433]).

**Sexta cuestión.-** ¿Habría prescrito la facultad administrativa para imponer el recargo al haber transcurrido más de cinco años? Cuando han transcurrido más de cinco años desde el final de los 135 días hábiles establecidos para resolver el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en la DA 25ª LGSS y el RD 286/2003, de 7 de marzo, contados desde la incoación del expediente de recargo sin que se haya producido interrupción de la prescripción. Así se pronuncia la [STS 12-11-2013](#) (RJ 2014, 489) que señala: *«Habrà de estarse, por tanto, a la regla que fija el plazo para resolver, a la que ya nos hemos referido, si bien no para entender caducado el expediente, sino para entenderlo resuelto por silencio.*

*Alcanzado el plazo máximo de 135 días hábiles del art. 14.1 de la OM de 1996, desde el acuerdo de iniciación del procedimiento o desde la recepción de la solicitud de iniciación del interesado (el trabajador o sus beneficiarios), se entenderá resuelto el expediente en sentido negativo y, por consiguiente, se reiniciará el cómputo del plazo de prescripción del derecho, que había quedado interrumpido con la incoación de aquél. Todo ello sin perjuicio de que la Entidad Gestora pudiera acordar, en su caso, la ampliación del plazo con arreglo a lo que permite el art. 14.2 de la OM y los arts. 42 y 49 LRJAP-PAC.*

*Ello no se contradice con la obligación de resolver que tenga el INSS con arreglo al propio art. 14.3 de la OM, en consonancia con el art. 44 LRJAP -PAC. Nada impide el mantenimiento de la eficacia de la resolución expresa posterior si se mantienen las circunstancias de vigencia del derecho. Así ocurrirá si en el momento en que el INSS dicta la resolución expresa imponiendo el recargo no se ha agotado el plazo de prescripción reiniciado o si éste se ha visto interrumpido de nuevo por la reclamación del interesado, por la existencia de un procedimiento judicial o sancionador ( [STS de 12 de marzo de 2007](#) [RJ 2007, 2278] –rucd. 4099/2005–) o, incluso, por la*



*apertura de un nuevo expediente de reconocimiento de prestaciones diferentes. Todos ellos actuarán como mecanismo de interrupción de la prescripción y, en consecuencia, ningún impedimento habría en volver a instar la fijación del recargo. Como decíamos en la [STS de 18 de octubre de 2007](#) (RJ 2008, 799) (rcud. 2812/2006), cuando la resolución administrativa no se dicta en plazo el interesado no pierde el derecho, pudiendo acudir a los tribunales tras entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.*

*La finalidad del plazo de 135 días es permitir al trabajador reaccionar ante la falta de respuesta en un procedimiento que tiene por finalidad dotarle de una mayor protección y resarcirle por la contingencia profesional acaecida.*

*Lo que se indica es que el tiempo de interrupción de la prescripción no puede quedar sometido a la mera inactividad administrativa cuando la ley establece tanto el citado principio de impulso procedimental, como las consecuencias de la falta de resolución en plazo».*

*Por otra parte, la [STS/IV, de 19/7/2013](#) (RJ 2013, 7304) (RCUD 2730/2012) reitera esta nueva doctrina, precisando lo siguiente: «En efecto, de acuerdo con la doctrina de esta Sala, el recargo de prestaciones tiene un plazo de prescripción de cinco años. Este comienza a correr desde el momento en que la acción puede ser ejercitada, que es en el momento en que concurren los tres elementos que integran el derecho: 1) el accidente de trabajo; 2) la infracción de las medidas de seguridad y 3) el hecho causante de la prestación de Seguridad Social objeto de recargo». Y añade, respecto a esto último, que la interrupción del plazo de prescripción se mantiene hasta que la declaración de la prestación de base que es objeto de recargo sea judicialmente firme (en caso de que se hubiera impugnado). Concreta además que, una vez iniciada la prescripción, existen «diversos supuestos interruptivos», entre ellos, «el del procedimiento sancionador con la resolución de la alzada». Y afirma, finalmente, que entre todos esos posibles motivos de interrupción de la prescripción, debe escogerse el que produce «el efecto interruptivo más favorable para el interesado». Conviene recordar también que el art. 43.2 LGSS establece que «la prescripción se interrumpirá por las causas ordinarias del artículo 1973 del Código Civil (...)» y que el art. 43.3 LGSS determina que «en el supuesto de que se entable acción judicial contra un presunto culpable, criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras aquélla se tramite (...)».*

**Séptima cuestión.-** Por último nos preguntábamos si la cuantía del recargo debía deducirse del importe de la indemnización por daños y perjuicios. A este respecto debemos aclarar que el artículo 123.3 LGSS establece expresamente la compatibilidad del recargo con las responsabilidades de todo orden que se deriven del accidente incluidas las penales y civiles. Y, de ahí, que no tenga porqué deducirse del monto indemnizatorio por daños y perjuicios el montante correspondiente al recargo de prestaciones. Así la [STS \(C\) 3-12-2008](#) (RJ 2008, 6945) establece que la imposibilidad de compensación del recargo de prestaciones por accidente de trabajo como consecuencia del incumplimiento de las medidas de seguridad con la indemnización que corresponda percibir al trabajador accidentado por razón de responsabilidad civil del empleador ha venido siendo declarada reiteradamente por la jurisprudencia de la Sala Cuarta de este Tribunal, en doctrina consolidada a partir de la [STS 2-10-2000](#) (RJ 2000, 9673).

Esta doctrina tiene su fundamento en el hecho de que la deducción del citado recargo de la indemnización por el daño o perjuicio sufrido a consecuencia de un accidente de trabajo dejaría vacía de contenido su finalidad, ya que el recargo, en una sociedad con altos índices de siniestralidad, persigue evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales. En opinión del Supremo, nuestro ordenamiento de Seguridad Social quiere que, ante dos accidentes de trabajo de los que hubieran derivado en abstracto idénticos daños y perjuicios para los trabajadores afectados (uno originado por las conductas empresariales infractoras de medidas de seguridad y otro en el que no concurra tal infracción) exista una desigualdad, objetiva y razonable en orden a las indemnizaciones que deberán ser superiores cuando concurren infracciones trascendentes en materia de seguridad e higiene o de riesgos laborales, desigualdad que desaparecería, de seguirse la tesis contraria a la no deducción del recargo (en el mismo sentido, [SSTS 9-10-2001](#) [RJ 2001, 9595], [21-2-2002](#) [RJ 2002, 4539], [17-7-2007](#) [RJ 2007, 8300], y [24-7-2008](#) [RJ 2008, 4626] entre otras muchas). En resumidas cuentas, según el Supremo, el recargo pretende sancionar al empresario negligente, por lo que no debería acumularse esta cantidad, que no tiene como

finalidad reparar el daño causado, sino sancionar a quien lo ha ocasionado.

© 2015 [Thomson Reuters (Legal) Limited]